

Elecciones en tiempos de violencia, garantizar el voto libre en contextos inseguros.

Por: Javier Ubiera

Introducción

La democracia, entendida como el sistema político que garantiza la participación libre, periódica y equitativa de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, encuentra en los procesos electorales uno de sus pilares más visibles y fundamentales. En América Latina, región históricamente marcada por transiciones políticas complejas, los avances en materia electoral han sido significativos: el sufragio universal, la alternancia en el poder y la consolidación de organismos electorales independientes han sido logros importantes. Sin embargo, estos avances se ven hoy profundamente amenazados por un fenómeno creciente y preocupante: la violencia.

Desde México hasta Haití, pasando por Ecuador, Colombia y otros países del continente, la violencia se ha convertido en un obstáculo real para la participación ciudadana, la seguridad de los candidatos y la legitimidad de los procesos electorales. Ya no se trata únicamente de índices delictivos o problemas de seguridad ciudadana; hablamos de una violencia política y estructural, muchas veces ejercida por grupos armados, crimen organizado y redes criminales, que buscan incidir directamente en la vida democrática, cooptando instituciones, sembrando el miedo y reduciendo la participación social.

En este contexto, surge una pregunta ineludible: ¿puede sobrevivir la democracia cuando las elecciones se celebran entre amenazas, asesinatos, abstención masiva y control territorial de actores violentos? La respuesta a esta interrogante es compleja, pero urgente.

La violencia como amenaza a la democracia en América Latina

La finalidad de los comicios regulares en todo régimen representativo reside, sencillamente, en mantener el Estado, tomando en cuenta que el mismo busca asegurar el progreso comunitario. Así, el vencedor de cada votación debe garantizar el interés ciudadano.

En América Latina se han realizado avances importantes en materia electoral, en donde esta misma se destaca por ser el aspecto más relevante de la democracia, pese a las demás falencias del sistema democrático. Sin embargo, lo cierto es que los procesos electorales han permitido el ejercicio del sufragio universal, ello como una expresión de los pueblos, es decir, de sus decisiones. No obstante, esta democracia se ve amenazada por la presencia de la violencia en diferentes países de la región, y con múltiples expresiones.

El Banco Mundial, en sus informes recientes de 2024, ha enfatizado con urgencia la crítica situación de violencia en América Latina y el Caribe, destacando la necesidad imperativa de medidas efectivas para su erradicación. Esta preocupación no es nueva, pero la institución ha reiterado que la escalada del crimen organizado y la violencia letal representan una barrera fundamental para el desarrollo económico y social de la región (Rivas, 2025).

Las afirmaciones del Banco Mundial ponen en evidencia el daño directo de la violencia: no solamente coloca en contextos inseguros la democracia electoral y la participación ciudadana, sino que también impide el desarrollo, aspecto crucial para la concretización mayor de los sistemas democráticos. Por tanto, con esto se comprende que se trata de un flagelo real y alarmante.

El informe del Banco Mundial (2024) expresa lo siguiente:

Aunque representa solo el 9% de la población mundial, registra un tercio de los homicidios. En la primera década de este siglo, la tasa promedio de homicidios en América Latina fue 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1), y la brecha se ha ampliado en los últimos 20 años a ocho.

En esto, lo que es aún más grave es que, en los últimos 20 años, esta brecha se ha ampliado a ocho veces. Esto significa que, mientras otras regiones pueden haber experimentado fluctuaciones, o incluso descensos, en sus tasas de homicidio, América Latina ha visto un incremento o una consolidación de esta violencia extrema a un ritmo desproporcionadamente mayor.

Elecciones en tiempo de violencia

Así mismo, hay que resaltar que la violencia crea contextos inseguros que precisamente impiden la organización de procesos electorales libres. Esto ha escalado de manera notoria en la reciente época, perturbando procesos electorales y exponiendo la integridad de figuras públicas importantes, electores y otros actores importantes. De esa manera, se verifica que no solamente afecta a los actores, también a las organizaciones políticas, al electorado e impide el libre funcionamiento de las instituciones electorales, las cuales tienen la responsabilidad de organizar y supervisar cada certamen electoral.

En esa misma tesitura, todo parte de la realidad de que en localidades afectadas por alta criminalidad, la respuesta inicial de sus habitantes es evitar áreas riesgosas. Esto, genera una situación que impulsa el desuso de lugares públicos, limitando la participación en actividades comunitarias, orientándola al espacio privado. Por tanto se corroe con esto la cohesión social, afectando por ende directamente a la sociedad, entendida como ese conjunto de interrelaciones sociales de los individuos.

Conforme a Putnam (p. 167), se afecta en tales circunstancias el capital social, el cual comprende características de la estructura comunitaria, como credibilidad, normas y redes, que mejoran la eficiencia colectiva al propiciar actuaciones conjuntas. Tal aspecto representa un componente esencial en la edificación y solidez del régimen democrático.

En esa medida en que se afecta la cohesión social, también los ciudadanos deciden dejar de participar en las actividades electorales, las cuales se desarrollan lógicamente dentro de la sociedad, que precisamente vienen a conformar los procesos eleccionarios, y que dan vida a la democracia. Por tanto, la violencia y los contextos inseguros afectan tanto a la sociedad como a la democracia.

En esto se verifican falencias del Estado en la garantía de la seguridad, demostrando las debilidades institucionales (lo que Emile Durkheim llamaría anomia) en materia de control de la violencia y criminalidad, y de la protección de sus ciudadanos. En tanto, aislarse es una respuesta natural de los ciudadanos para procurar garantizar la seguridad por sus propios medios, que en este caso, es estar en sus espacios privados.

En este contexto, se comprende que esto afecta precisamente la vida democrática, vista desde la participación de la población en actividades electorales y en el ejercicio del voto.

En consecuencia, esto genera niveles altos de abstención, así como falta de legitimidad de los procesos electorales, y esto genera democracias débiles.

Conforme a Cruz (sf):

La inseguridad generada por la violencia deriva en desconfianza interpersonal. Una comunidad aterrorizada suele desconfiar de los desconocidos y los diferentes. La desconfianza impone patrones de conducta que obstaculizan la integración comunitaria y que reducen la tolerancia a lo desconocido. Una investigación en Jamaica mostró que en las comunidades con mucha violencia, las asociaciones informales comunitarias carecían de espacio para constituirse: salones de baile, clubes juveniles e instalaciones deportivas habían dejado de funcionar como sitios de encuentro juvenil; estaban tomados por las pandillas o simplemente abandonados (p. 15).

Por tanto, la violencia y la inseguridad no son solo problemas de orden público, sino que son amenazas directas a la salud de las instituciones democráticas y a la capacidad de una sociedad para prosperar colectivamente.

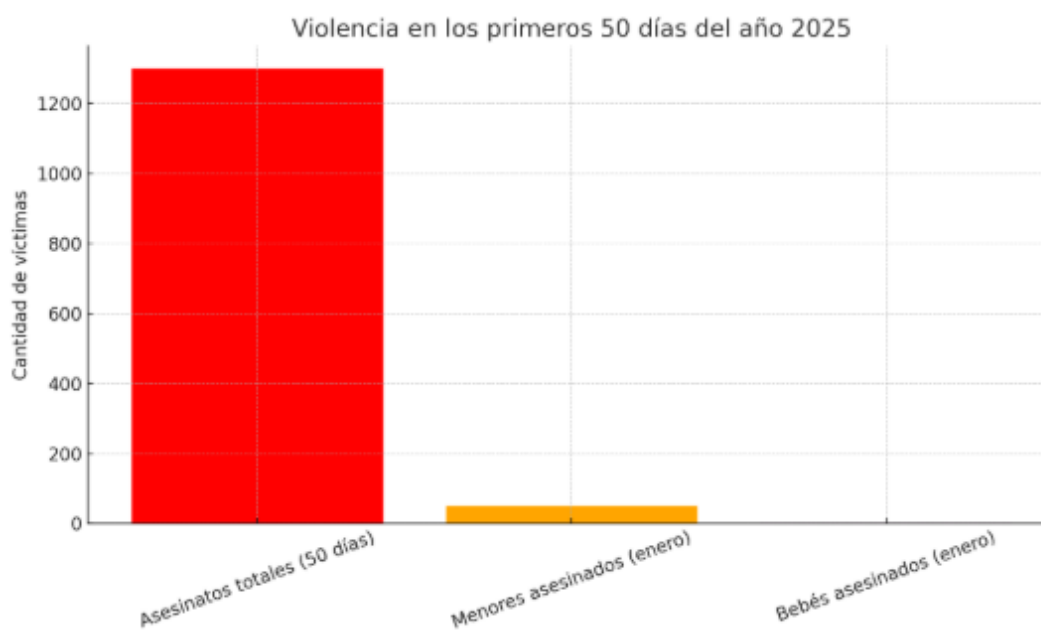
Aparte, hay que mencionar que la violencia proviene de grupos armados y del narcotráfico, que nada quieren saber del buen funcionamiento del Estado. Esto se ha verificado recientemente en México, Colombia, Haití, Ecuador, solamente por mencionar unos cuantos casos.

En el caso de Ecuador, aunque no entra precisamente en el análisis comparativo que nos interesa realizar, pero es interesante mencionarlo, porque resulta alarmante que de acuerdo a Mella (2025) se haya convertido en el país más violento de América Latina. Esto se debe a que las pandillas han incrementado su poder, y las medidas tomadas desde el Estado ecuatoriano no han surtido efectos con eficacia. En el 2023 por ejemplo salía a la luz una noticia desde el diario El País de España que expresaba “Los ecuatorianos en España votan por la abstención: “Con toda la violencia y corrupción, no sé si mi voto generará un cambio” (Mella, 2025).

Esto refleja la pérdida de fe de la ciudadanía en el sistema democrático y en la capacidad de su voto para generar un cambio significativo frente a la abrumadora violencia y corrupción. Esta apatía y escepticismo, impulsados por la percepción de ineficacia estatal,

no solo contribuyen al abstencionismo, sino que también profundizan la crisis de legitimidad y debilitan aún más la ya precaria democracia en estos contextos.

Figura No. 1 Violencia Ecuador



A partir de esto se observa que se registraron 1.300 asesinatos, lo que equivale a un promedio de un crimen por hora. Esta cifra es alarmante, no solo por su volumen absoluto, sino porque representa un incremento del 40% con respecto al mismo periodo de 2023, año que ya había sido calificado como el más violento en la historia reciente del país.

También se observa que de los 1.300 asesinatos, al menos 50 víctimas fueron menores de edad. Esto evidencia que la violencia afecta a toda la población, es decir, menores y adultos. Además, la comparativa con el 2023 indica el ascenso de la violencia en este país sudamericano.

Estos datos van de la mano con los planteados por el Banco Mundial, en el sentido del nivel ascendente de la violencia en América Latina. Todo esto afecta la democracia, pues la democracia abarca, por un lado, el acatamiento de normas estructuradas respecto a quién delibera y a través de qué métodos, tal como explicó Bobbio (1996). Por otro lado, desde una concepción de fondo, la democracia denota la prohibición de acordar ciertas determinaciones que menoscaben los derechos esenciales de los individuos, como expuso

Ferrajoli (1998). En ambos casos, subyace una dimensión ética crucial, y es que existen valores inviolables, puesto que, de ser vulnerados, el esquema dejaría de ser democrático.

Ante esta cruda realidad, el Estado Social y Democrático de Derecho se ve profundamente afectado en América Latina cuando las vidas de las personas corren peligro, y es que el siglo XXI, especialmente el presente año del 2025 ha presentado eventos que despiertan aún más la violencia política. Aparte del caso mencionado de Ecuador, se encuentra el atentado contra el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe, la violencia en la campaña política y electoral de México durante el 2024, el caótico escenario violento que se gesta en Haití, solamente por mencionar algunos casos.

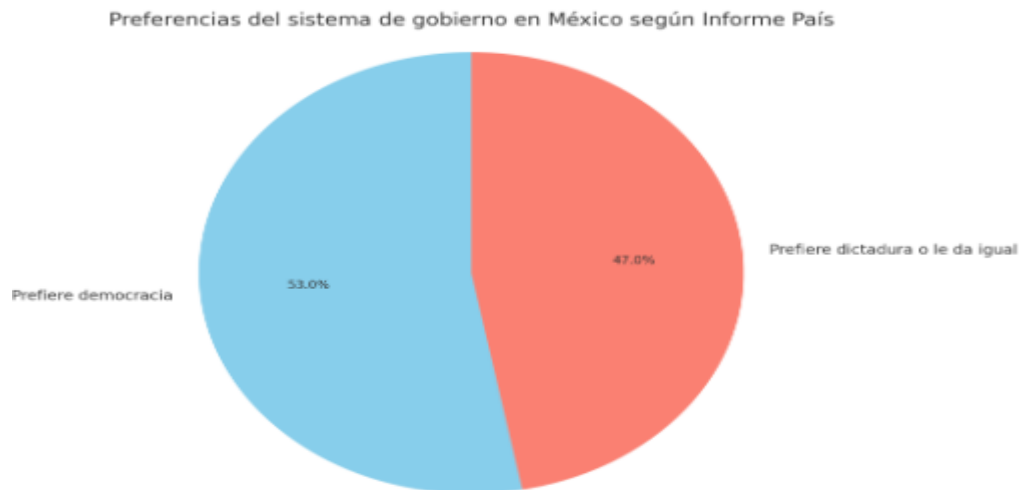
México, Haití y Colombia: La violencia con diferentes rostros y formas

La violencia en México

Estas circunstancias son las que se presentan y afectan directamente la credibilidad y confianza en la democracia por parte de la población y que dan lugar a que la gente tenga mayor preferencia por las dictaduras. Al respecto, Nieto y Espíndola (2017) establecen:

En México, de acuerdo con el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, nuestro país se encuentra por debajo del promedio de apoyo a la democracia en países latinoamericanos. El 47% de las personas entrevistadas consideró que prefería un sistema autoritario o que le daba lo mismo un tipo de sistema u otro. En un solo año el nivel de aceptación de la democracia (2012 a 2013) cayó un 5%.²⁸ Es preciso reflexionar qué ha sucedido (p. 224).

Figura No. 2 Informe País México



Fuente: Informe País México, citado por Nieto y Espíndola (2017)

El hecho de que casi la mitad de los encuestados en México (47%) prefiera un sistema autoritario o le sea indiferente el tipo de gobierno, y que el apoyo a la democracia haya disminuido un 5% en tan solo un año (2012-2013), es sumamente alarmante. Estas cifras no solo sitúan a México por debajo del promedio latinoamericano en cuanto a apoyo democrático, sino que también plantean una interrogante urgente sobre las causas de esta desilusión.

De acuerdo con el informe del Índice Global de Crimen Organizado 2023, México se posiciona en el tercer puesto a nivel internacional respecto a la presencia de estructuras delictivas. Estas entidades ilícitas mantienen una influencia considerable sobre el territorio nacional, valiéndose de la cooptación y la presión para manipular organismos gubernamentales. A esto se suma que participan activamente en actividades ilegales como el comercio de estupefacientes, la explotación de personas, el contrabando de armamento. No obstante, los carteles más influyentes han ido más allá de estos ámbitos ilícitos, incursionando en espacios estratégicos de gobernanza, donde la impunidad facilita su penetración y control.

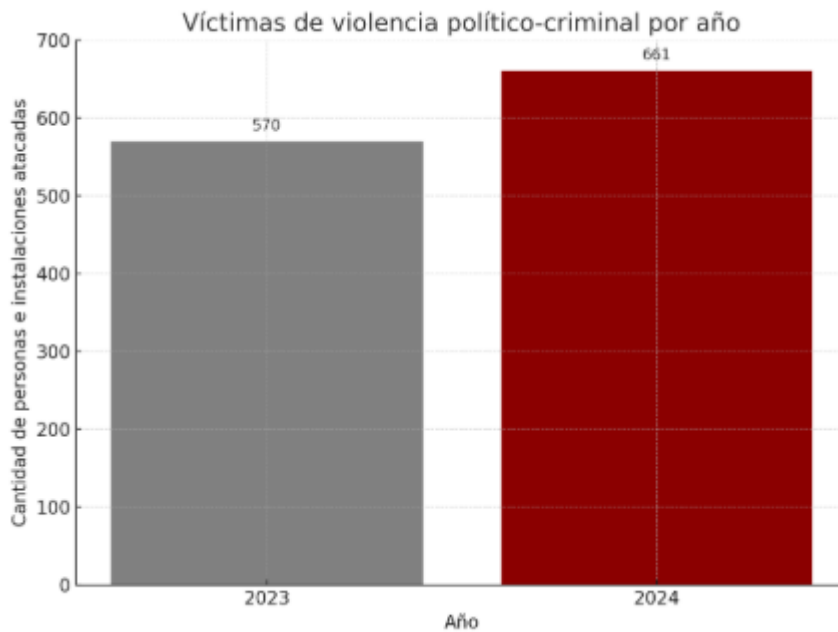
En el caso mexicano, pese a que las organizaciones delictivas operan en todo el territorio, la situación en Sinaloa resulta especialmente alarmante. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2023), la mitad de la población sinaloense percibió altos niveles de peligro y ubica esta problemática como la principal. Esta percepción está fuertemente ligada al arraigo del narcotráfico, debido a la presencia del Cártel de Sinaloa.

Conforme a Félix (2024) en el 2023, en Sinaloa dentro del contexto electoral, se registraron homicidios, desapariciones forzadas, atentados violentos y actos de intimidación dirigidos a comunicadores, aspirantes a cargos públicos y autoridades electorales. En todo el país, se reportaron cerca de 300 incidentes relacionados con actos violentos durante el proceso electoral del 2023.

Asimismo, hay que mencionar que entre 2018 y 2023 el 77 % de los postulantes a la dirección de los municipios fueron blanco de agresiones, acumulándose un total de 836 eventos violentos contra ellos. Esto muestra un escenario político en donde el narcotráfico y la violencia toman control directo de Sinaloa y como evidentemente la violencia puede llegar a cualquier esfera social y política (Félix, 2024).

De este escenario se desprenden reflexiones que precisamente con anterioridad estábamos señalando, entre ellas el hecho de la incapacidad lamentable del Estado para controlar la criminalidad, hasta el punto en quedar acorralado y perder el control de un determinado espacio ante las redes criminales. Sinaloa precisamente se ha convertido en el ejemplo de cómo las redes criminales pueden afectar la tranquilidad de una determinada sociedad, y especialmente lo relacionado con la libre participación de la población.

Figura No. 3 Víctimas de violencia



Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Data Cívica, organización mexicana que investiga el tema.

Esto revela un alarmante incremento en la violencia político-criminal durante el año 2024, en comparación con 2023. Específicamente en 2023, se registraron 570 ataques dirigidos contra personas e instalaciones relacionadas con el ámbito político. Para 2024, esa cifra aumentó a 661, lo que representa un crecimiento del 16% en solo un año. Este ascenso señala una intensificación del riesgo que enfrentan figuras públicas, candidatos, funcionarios e infraestructuras vinculadas al sistema político, particularmente en un contexto electoral.

La violencia en Haití

En el caso de Haití, si bien su historia ha estado caracterizada por la inestabilidad política, su situación se ha venido agudizando, especialmente a partir del asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Desde entonces, la inseguridad y violencia ha tomado mayor control en las calles por parte de las pandillas que han ocasionados asesinatos.

Conforme a información proporcionada por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), en el transcurso del año 2025 se han contabilizado más de 4,000 homicidios, entre los cuales figuran al menos 465 víctimas pertenecientes a poblaciones vulnerables como niños y mujeres. La escalada de violencia ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 1.3 millones de personas dentro del territorio nacional, alcanzando un máximo histórico en tiempos recientes (Naciones Unidas, 2025).

En todo esto, una ofensiva armada en Puerto Príncipe a inicios del año pasado provocó el establecimiento de una administración provisional y el despliegue de una fuerza encabezada por kenianos con el objetivo de enfrentar a los grupos criminales. Sin embargo, los conflictos institucionales han inmovilizado a estas autoridades, fortaleciendo a los actores violentos y reduciendo las posibilidades de organizar comicios sin contratiempos y en contexto seguro (International Crisis Group, 2025).

A partir de esto último se comprueba como en el caso particular de Haití el poder de las pandillas se ha sobrepuesto sobre el Estado haitiano, en múltiples ocasiones considerado como Estado fallido, ha sido mayor la fuerza de la violencia y ha paralizado la celebración de elecciones en ese país. Por tanto, es un fiel retrato de la como puede la violencia y un contexto inseguro dejar sin acciones a un Estado.

En este sentido, Haití se constituye en el claro ejemplo de como ha sido paralizada la democracia debido a la violencia de las pandillas. En tanto que la democracia deja de funcionar cuando la violencia toma el control. En un informe de la organización International Crisis Group (2025) se expresa lo siguiente:

Celebrar elecciones en las condiciones actuales sería inseguro tanto para los candidatos como para los votantes. A pesar de logros aislados de la policía y la misión de seguridad en su campaña contra las pandillas, estos grupos controlan gran parte de la capital y carreteras esenciales en el resto del país y los combates se están extendiendo a otras regiones. En los últimos cinco meses, las pandillas han ejecutado al menos cuatro masacres, las cuales han cobrado cerca de 400 vidas. Escalonar el calendario electoral o ubicar los centros de votación fuera del territorio controlado por las pandillas podrían hacer posible la votación en algunas zonas. Pero el resultado probablemente sería una participación muy baja, seguramente inferior al 20 por ciento observado en las últimas elecciones de Haití en 2016. Las pandillas también podrían sembrar el miedo en los lugares bajo su dominio para que sus aliados consigan posiciones de poder.

Esta situación descrita presenta un panorama desalentador para la celebración de elecciones en Haití. La preocupación por la seguridad de candidatos y votantes es completamente justificada, dada la vasta influencia de las pandillas. El hecho de que estos grupos controlen gran parte de la capital y vías esenciales, sumado a la extensión de los combates a otras regiones, crea un ambiente de inestabilidad que dificulta cualquier proceso democrático transparente y justo.

Las cifras de las masacres y las vidas perdidas son hechos impactantes de la violencia que azota al país, lo que naturalmente disuadiría a la población de participar en actividades cívicas como las elecciones. En este contexto, cualquier intento de realizar comicios enfrentaría serios desafíos.

Las soluciones propuestas, como escalonar el calendario electoral o reubicar los centros de votación, aunque buscan mitigar los riesgos, probablemente tendrían un impacto limitado. Una participación extremadamente baja, posiblemente inferior al 20% registrado en 2016, no solo restaría legitimidad al proceso, sino que también abriría la puerta a la manipulación. La posibilidad de que las pandillas siembren el miedo para

favorecer a sus aliados es una amenaza real que podría distorsionar completamente los resultados electorales.

Además, hay que resaltar que las complejidades en Haití para la celebración de elecciones son mayores debido a que el país está pasando por una grave crisis humanitaria que sigue empeorando. En esto, casi la mitad de su gente no tiene suficiente comida, según el último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha advertido que, si no se actúa rápido para resolver los problemas de fondo, la situación podría empeorar aún más.

Entre marzo y junio de 2024, unos 4.97 millones de haitianos han pasado por una situación muy difícil por la falta de alimentos. De ellos, alrededor de 1.64 millones (un 17% del total analizado) están en una condición muy grave, llamada "emergencia" por la CIF. Estas personas viven sobre todo en lugares como el valle del Artibonite, zonas rurales de La Grand'Anse, La Gonâve, parte del Oeste y barrios muy pobres como Cité Soleil, Croix de Bouquets y Puerto Príncipe. Esto representa un aumento de más de 500,000 personas en situación crítica respecto a lo que se había estimado antes.

Esta crisis se ha agravado por varios motivos: el aumento de la violencia de pandillas, la crisis económica, malas cosechas, lluvias muy por debajo de lo normal, los efectos del terremoto de 2021, inundaciones recientes y la poca ayuda que está llegando. Además, la violencia ha obligado a unas 362,000 personas a dejar sus hogares, incluyendo 50,000 que se desplazaron solo en los últimos tres meses, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La crisis institucional en Haití, intensificada tras el magnicidio de Jovenel Moïse, el auge de organizaciones criminales y el deterioro financiero, ha repercutido notablemente en el control limítrofe dominicano. Los flujos humanos irregulares y la escasez alimentaria agravan las presiones en la zona fronteriza, haciendo imprescindible una estrategia más holística que contemple alianzas multilaterales y cooperación territorial ampliada.

La violencia en Colombia

Colombia, un país con antecedentes de violencia y contextos inseguros para la actividad política ha tenido acontecimientos lamentables en el presente año de 2025, tal como

habíamos mencionado con anterioridad. En esta tesitura se ha verificado el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe, que ha puesto su vida al borde de la muerte.

Igualmente, hay que analizar que en este ambiente Colombia se encuentra en la antesala para la celebración de los comicios presidenciales que serán celebrados en 2026. Precisamente, es la violencia y la inseguridad lo que amenaza la celebración de comicios electorales en algunos departamentos de esta nación.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha señalado los desafíos cruciales que enfrentan las próximas elecciones colombianas de 2026, donde se elegirá un nuevo mandatario y legisladores. Entre las principales preocupaciones se destacan: la agresión, la administración y el gasto de fondos en la contienda, la división del panorama político, y la utilización nociva de la inteligencia artificial. Estos elementos representan serias amenazas para la integridad de los sufragios.

Figura No. 4 Violencia en Colombia



Fuente: Elaboración propia. Fuente: SiPares

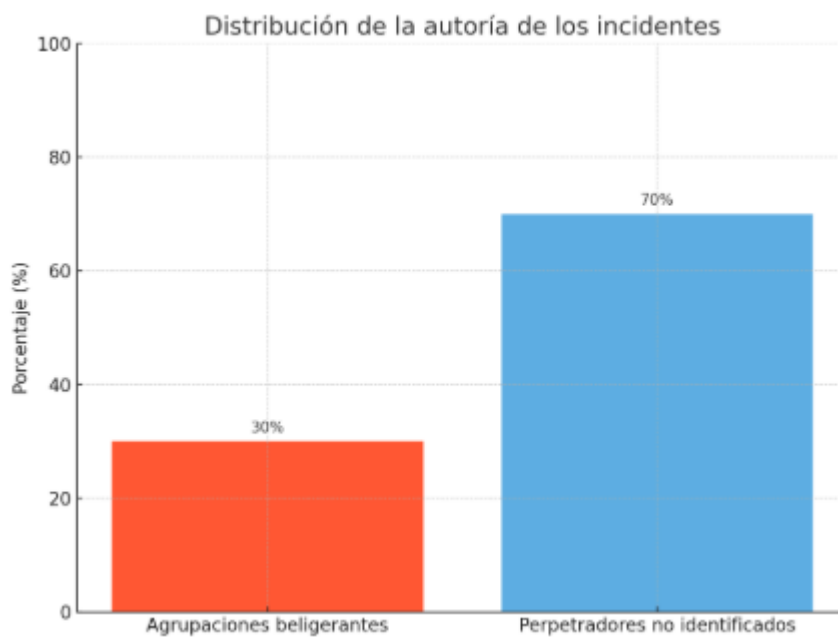
A partir de esto, se aprecia que las amenazas son las principales formas de violencia en el contexto electoral de Colombia, mientras que le siguen los atentados y luego los homicidios. Además, los datos del informe de SiPares revelan que estas diferentes manifestaciones de violencia persisten como instrumento de la plena competencia en estos momentos electorales (Salazar, 2025).

En un contexto inseguro como este que actualmente padece Colombia, la democracia se ve altamente afectada. Los actores de la actividad política no pueden manejarse con la

total tranquilidad propia de un país democrático porque pueden padecer una amenaza, atentado o ser asesinados.

Al menos un cuarto a más de un tercio de los incidentes se atribuyen a agrupaciones beligerantes estructuradas. El resto de los perpetradores permanece oculto, complicando su enjuiciamiento y la contención de la falta de castigo.

Figura No. 5 Autoría de ataques violentos Colombia 2025



Este gráfico expone un panorama preocupante, pues la mayoría de los incidentes quedan sin autor identificado, lo cual no solo limita las acciones judiciales, sino que también mina la confianza ciudadana en el sistema de justicia y seguridad. Esto afecta directamente la confianza de las personas de integrarse a los procesos electorales. Aunque una parte menor se atribuye a actores estructurados, la invisibilidad del 70% de los perpetradores sugiere una necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de investigación criminal, inteligencia y acceso a información confiable.

Tal cual como se puede verificar, estos contextos inseguros afectan directamente la integridad electoral. Se limita directamente el funcionamiento del sistemas electoral, dígame sus normativas y garantías para que el proceso pueda ser justo, libre y con transparencia. Por tanto, la democracia tiene una gran amaneza en la violencia.

Reflexiones finales

A través de estas líneas hemos podido verificar una realidad innegable y alarmante: la violencia, en sus múltiples manifestaciones, se ha consolidado como una de las amenazas más apremiantes para la vitalidad de la democracia en América Latina. Esto, más allá de ser un simple problema de orden público, la criminalidad organizada y la inseguridad permean el tejido social y político, socavando los pilares fundamentales sobre los que se asientan los regímenes democráticos representativos.

Las libertades se ven profundamente afectadas, en conjunto con la cohesión social. Por tanto, la violencia destruye la sociedad y la democracia, tanto en el aspecto relacionado con la organización de elecciones libres, la integridad electoral, así como el Estado Social y Democrático de Derecho.

La finalidad intrínseca de los procesos electorales, que es la de canalizar la voluntad popular y asegurar el progreso comunitario, se ve gravemente comprometida. Los datos presentados, desde las alarmantes tasas de homicidios en la región hasta la creciente victimización de actores políticos en países como Colombia y México, demuestran que la violencia no es un fenómeno marginal, sino una herramienta de competencia y control. Además, esto indica, que las organizaciones criminales también compiten por el poder, es decir, buscan desde la clandestinidad tener una influencia sobre el sistema político.

La expansión del crimen organizado, su capacidad de cooptar instituciones y la persistencia de la impunidad ante la autoría anónima de los ataques, crean un círculo vicioso que debilita la confianza ciudadana en el sistema y, en última instancia, en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia. Todo esto crea una secuela natural: la ciudadanía deja de creer en el Estado y sus instituciones, y por tanto en la democracia, evocando en ocasiones los regímenes autoritarios.

En todo esto, casos como los de Ecuador, México, Haití y Colombia ilustran la diversidad y la gravedad de este flagelo. En Haití, la violencia de las pandillas ha paralizado la gobernanza y la posibilidad misma de celebrar comicios legítimos, llevando a una crisis humanitaria y de legitimidad sin precedentes. En México, la influencia de las estructuras delictivas evidencian un escenario con profundos riesgos para las vidas de sus actores.

Colombia, por su parte, enfrenta una escalada de violencia político-electoral que amenaza la integridad de sus próximas elecciones, con un predominio de amenazas y atentados que buscan coartar la participación.

La erosión del capital social, la desconfianza interpersonal y el consecuente retraimiento de los ciudadanos de los espacios públicos y de la participación electoral son consecuencias directas de estos contextos de inseguridad. La abstención y la falta de legitimidad de los procesos electorales son consecuencias y a la vez síntomas claros de democracias debilitadas, incapaces de cumplir con la promesa de progreso y protección para sus ciudadanos.

Además, en los casos analizados revela una realidad: la debilidad del Estado frente a la violencia. Por encima de esto, se incrementan los niveles de violencia, en ocasiones acorralando a las instituciones del Estado, lo cual lacera la democracia en estos tiempos.

En definitiva, esta realidad no solo pone en riesgo la vida de las personas, sino que desdibuja la esencia misma de la democracia, entendida tanto en su dimensión procedimental (reglas y métodos) como sustantiva (garantía de derechos fundamentales). El desafío es monumental y exige una respuesta integral que vaya más allá de la mera aplicación de la ley, abordando las raíces socioeconómicas de la criminalidad, fortaleciendo las instituciones, promoviendo la cohesión social y, sobre todo, reafirmando el compromiso inquebrantable con los valores democráticos que, de ser vulnerados, dejarían a la región en un estado de anomia y fragilidad permanente.

Bibliografía

Banco Mundial. *Informe Económico de América Latina y el Caribe*. Recuperado de <https://reliefweb.int/report/haiti/informe-economico-america-latina-y-el-caribe-abril-2025-crimen-organizado-y-violencia-en-america-latina-y-el-caribe>

Bobbio, Norberto (1996). *El futuro de la democracia*, F.C.E, México.

Cruz, J. (sf). *Violencia, democracia y cultura política*. Disponible en: https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2856_1.pdf

Félix, L. (2024). Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2024) *Sinaloar: Aumento de violencia y crimen organizado de cara a las elecciones mexicanas*. Disponible en: <https://globalinitiative.net/analysis/sinaloar-aumento-violencia-elecciones-mexicanas/> (Accedido: 30 de julio de 2025).

Ferrajoli, Luigi (1998). *Derechos y garantías, La ley del más débil*, Trotta, Madrid.

Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Índice Global de Crimen Organizado 2023.

Rivas, F. (2025) *El Banco Mundial insta a América Latina a priorizar la lucha contra el crimen organizado*. El País. Disponible en: <https://elpais.com/america/2025-04-28/el-banco-mundial-insta-a-america-latina-a-priorizar-la-lucha-contr-el-crimen-organizado.html> (Accedido: 29 de julio de 2025).

Mella, C. (2025, 02 de marzo) *Ecuador se sitúa como el país más violento de América Latina: un asesinato cada hora*. El País. Disponible en: <https://elpais.com/america/2025-03-02/ecuador-se-situa-como-el-pais-mas-violento-de-america-latina-un-asesinato-cada-hora.html> (Accessed: 29 July 2025)

International Crisis Group. (2024) *Locked in Transition: Politics and Violence in Haiti*. Disponible en: <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/caribbean/haiti/107-locked-transition-politics-and-violence-haiti> (Accedido: 30 de julio de 2025).

Salazar, C. (2025, 10 de junio). Infobae. *Violencia político-electoral en Colombia no da tregua: en tres meses hubo una víctima cada día de por medio*. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2025/06/11/violencia-politico-electoral-en->

[colombia-no-da-tregua-en-tres-meses-hubo-una-victima-cada-dia-de-por-medio/](#)

(Accedido: 30 de julio de 2025).